



**CORTE
SUPREMA
DE JUSTICIA**

**ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:
"RAFAELA VILLALBA MARIANO C/ ARTS. 3º,
9º Y 10º DE LA LEY Nº 2345/03". AÑO: 2016 – Nº
920.**



ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: mil cuatrocienta cuarenta y cinco.
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a
días del mes de **OCTUBRE** del año dos mil diecisiete,
estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores
de la Sala Constitucional, Doctores **ANTONIO FRETES, GLADYS
BAREIRO DE MÓDICA** y **MIRYAM PEÑA CANDIA**, ante mí, el Secretario
autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: **ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD: "RAFAELA VILLALBA MARIANO C/ ARTS. 3º, 9º
Y 10º DE LA LEY Nº 2345/03"**, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad
promovida por el Abogado Gustavo González Román, en nombre y representación de la
Señora Rafaela Villalba.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala
Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:

CUESTION:

¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?

A la cuestión planteada la Doctora **BAREIRO DE MÓDICA** dijo: El Abogado
Gustavo González Román, en nombre y representación de la Señora "*Rafaela Villalba*",
según testimonio de Poder Especial que acompaña, se presenta ante la Corte Suprema de
Justicia a fin de solicitar la inaplicabilidad del Art. 1º de la Ley Nº 4252/10 "Que modifica
los Arts. 3, 9 y 10 de la Ley Nº 2345/03".

Manifiesta el citado profesional que su mandante era funcionaria de la Dirección
General de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, pero fue jubilada de
manera forzosa por haber pasado la edad de 65 (sesenta y cinco) años. Sostiene que la
norma impugnada resulta contraria a los Arts. 6, 46, 47, 57, 86, 92 y 103 de la Constitución
Nacional pues aparte de ser discriminatoria por no tomar en cuenta el desempeño
profesional de la Señora Rafaela Villalba, implica un menoscabo a sus ingresos, ya que la
misma goza de buena salud y capacidad física y mental para seguir en el cargo.

Como bien es sabido, la edad es una variable que normalmente como dato de la
demografía de un país, fluctúa conforme a la esperanza de vida, por lo que como tal puede,
el Poder Administrador, determinarlo de acuerdo con las características propias del país. En
ese sentido, la edad de "65 años" establecida en la Ley Nº 4252/10 no surge como
consecuencia directa y verificable de la expectativa de vida de la población paraguaya. Si
bien el Poder Administrador a través de una norma que lo habilita puede proceder a hacer
efectivas determinadas "*políticas públicas*", sin embargo, considero que ellas nunca pueden
ser operadas en perjuicio de la calidad de vida de sus afectados.

Es preciso traer a colación el informe brindado por la **Dirección General de
Estadística, Encuestas y Censos**, en el cual se deja expresa constancia que la esperanza de
vida al nacer es la siguiente: **Ambos sexos: 71,76; Hombres: 69,70; Mujeres: 73,92**,
aclarando que la definición utilizada para la esperanza de vida al nacer es la siguiente: "*Es
el número de años de vida que en término medio se espera que viva un recién nacido, de no
variar la tendencia en la mortalidad*" (Informe brindado en la Acción de
Inconstitucionalidad: "*Julio César Cantero Agüero c/ Art. 9 de la Ley Nº 2345/2003*". Nº
1579/09).

Siendo así, considero que la edad de 65 años establecida en la norma impugnada no
se encuentra razonablemente dimensionada, ni coincide en forma directa con la esperanza

Miryam Peña Candia
MINISTRA C.S.J.

Dr. ANTONIO FRETES
Ministro

GLADYS BAREIRO DE MÓDICA
Ministra

Abog. Julio C. Pavón Martínez
Secretario

de vida, ni mucho menos es consecuencia de una verificación de la expectativa de vida de la población paraguaya, de acuerdo con el informe brindado por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos.-----

Por ello, entiendo que la Ley N° 4252/10 (Que modifica el Art. 9 de la Ley N° 2345/03) resulta violatorio de los Arts. 6 de la Constitución Nacional: “...**De la calidad de vida.** La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad...”; Art. 57: “...**De la tercera edad.** Toda persona en la tercera edad tiene derecho a una protección integral. La familia, la sociedad y los poderes públicos promoverán su bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio...”.-----

Además, también contraviene los Arts. 46 (De la igualdad de las personas) y 47 (De las garantías de la igualdad) de la Carta Magna, ya que los trabajadores del sector privado no tienen limitaciones de edad para prestar sus servicios al empleador, e inclusive los funcionarios de las Fuerzas Armadas y Policiales, Magistrados en general, etc. recién a la edad de 75 años son pasibles de una jubilación obligatoria, situación que confirma la desigualdad existente hasta la fecha.-----

Por otro lado, el cálculo dispuesto por la Ley en base a la multiplicación de la Tasa de Sustitución por la Remuneración Base, así como la escala establecida en el Decreto Reglamentario, no permiten que la jubilación cumpla con el rol sustitutivo de la remuneración en actividad, rompiéndose el equilibrio que debe existir entre las remuneraciones de quienes se encuentran en actividad y los haberes de los jubilados. En este punto, la normativa legal y reglamentaria impugnada se oponen expresamente a lo que dispone el Art. 103, Segundo Párrafo, de nuestra Ley Suprema: “**La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad**”, ya que el conveniente nivel del haber jubilatorio solo se haya cumplido cuando el jubilado mantiene las condiciones patrimoniales equivalentes a la que le habría correspondido gozar en caso de continuar en actividad, *por lo que cualquier normativa legal o reglamentaria que regule esta cuestión debe respetar lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 103 de la Constitución Nacional.*-----

Las políticas salariales del Estado no deben derivar en modificaciones sustanciales del haber jubilatorio, que signifiquen una retrogradación en la condición de los pasivos, por lo que es inconstitucional que el Estado cause un menoscabo patrimonial a las acreencias previsionales, privándolas de un beneficio legalmente acordado. -----

Por las consideraciones que anteceden, opino que se debe hacer lugar a la Acción de Inconstitucionalidad, declarando inaplicable para la Señora “Rafaela Villalba Mariano” el Art. 1° de la Ley N° 4252/10 “Que modifica los Arts. 3, 9 y 10 de la Ley N° 2345/03”. Es mi voto.-----

A su turno el Doctor **FRETES** dijo: El Abg. Gustavo González Román en nombre y representación de la Sra. Rafaela Villalba Mariano promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley N° 4252/10 “**QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 10 DE LA LEY 2345/03 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO**”, específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley N° 2345/03 “**DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO**”.-----

Sostiene que la normativa recurrida por medio de esta acción de inconstitucionalidad infringe principios, derechos y garantías consagrados en los Art. 6, 46, 47, 57, 86, 92 y 103 de la Constitución Nacional.-----

Se refiere en autos que con la aplicación de la disposición recurrida se materializa un trato discriminatorio hacia los funcionarios mayores de 65 años, privándoles del derecho a seguir trabajando por alcanzar la edad referida en el artículo impugnado, por ende se peticiona la inaplicabilidad de la mencionada disposición.-----...///...



**CORTE
SUPREMA
DE JUSTICIA**

**ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:
"RAFAELA VILLALBA MARIANO C/ ARTS. 3º,
9º Y 10º DE LA LEY Nº 2345/03". AÑO: 2016 – Nº
920.**-----

RECIBIDO
25 OCT 2017
Roque López
S.P.D.E.P.S.

...En relación al cuestionamiento planteado, es preciso tener en consideración que la Resolución DGJP-B Nº 855 del 26 de marzo de 2015, obrante en autos, en ningún momento concede la calidad de jubilada a la Sra. Rafaella Villalba Mariano, es decir, en el citado acto normativo no se ha materializado la aplicación de la disposición referida a la desvinculación del funcionario activo para acogerse a los beneficios jubilatorios por alcanzar la edad requerida para el efecto, es decir, no se dispone de manera alguna la percepción mensual de haberes jubilatorios para la accionante, más bien, -en relación a la misma- se dispone la devolución de sus aportes de conformidad a lo establecido en el último párrafo de la ley Nº 4252/2010: *"Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90% (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay"*.-----

Teniendo en consideración la circunstancia referida en el parrado anterior, resulta oportuno traer a colación la disposición constitucional vinculada al sistema o régimen de Jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos principalmente al Art. 103 de la Constitución Nacional:-----

"Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado.

La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad".-----

En atención al artículo constitucional transcrito precedentemente, se advierte que la propia Ley Fundamental delega al Poder Legislativo la facultad de regular el sistema jubilatorio, así, lo relativo a dicha materia se constituye en lo que se denomina como reserva de ley.-----

Con relación al límite de edad establecido para el ejercicio de la función pública, diseñado en el artículo impugnado, tal y como lo hemos señalado, se encuentra dentro de las atribuciones constitucionalmente otorgadas en virtud al Principio de Reserva de Ley. Este principio es definido por Miguel Carbonell como *"la remisión que hace normalmente la Constitución y de forma excepcional la ley, para que sea una ley y no otra norma jurídica la que regule determinada materia. En otras palabras, se está frente a una reserva de ley cuando, por voluntad del constituyente o por decisión del legislador, tiene que ser una ley en sentido formal la que regule un sector concreto del ordenamiento jurídico"*, reserva que puede ser absoluta o relativa según los términos que utilice el texto constitucional al referirse a ella. En nuestro caso, vemos que la Constitución en el artículo 103 no establece límite alguno en la materia, ni especifica cuáles serán los aspectos jubilatorios reglados por ley, lo que significa que la reserva de ley es absoluta, en otras palabras, la Constitución entrega la potestad de creación, modificación, derogación y limitación de todos los aspectos jubilatorios a la ley. En tal sentido la edad para fijada para régimen jubilatorio se encuentra establecida en virtud a las potestades con las que cuenta el Congreso por delegación constitucional, lo que equivale a decir que la disposición cuestionada no es contrario a lo que dispone el 103 de la Ley Fundamental, sino que es

Abog. Julio C. Pavón Martínez
Secretario

Miryam Peña Candia
MINISTRA C.S.J.

DR. ANTONIO FRETES
Ministro

GLADYS E. BAREIRO de MÓDICA
Ministra

consecuencia directa de su cumplimiento, por lo que mal podría declarárselo inconstitucional.-----

Conforme a las circunstancias precedentemente descritas, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Abg. Gustavo González Román en nombre y representación de la Sra. Rafaela Villalba Mariano. ES MI VOTO.----

A su turno la Doctora **PEÑA CANDIA** dijo: Se presenta el Abog. Gustavo Raúl González Román en nombre y representación de la **señora Rafaela Villalba Mariano**, conforme testimonio de poder obrante en autos, a promover acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1° de la Ley N° 4252/2010 “*Que modifica los artículos 3°, 9° y 10° de la Ley N° 2345/2003 “De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público”*” —específicamente en la parte que modifica el Art. 9° de la Ley N° 2345/2003, alegando la conculcación de los Arts. 14, 46, 47 inc. 2) y 57 de la Constitución.-----

Como fundamento de su presentación señala, entre otras cosas, que “...la aplicación errónea de los Arts. 3°, 9° y 10° de la Ley 4252/2010, que modifica los Arts. 3°, 9° y 10° de la Ley 2.345/2003 “De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal, Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público”, ha ocasionado un grave perjuicio a mi mandante [...] mi mandante **NO SE RETIRÓ** de la función pública, **NO SOLICITÓ DEVOLUCIÓN DE SUS APORTES** y **NO RENUNCIÓ A SU TRABAJO**, por el contrario se siente con fuerza y voluntad de seguir trabajando con absoluta responsabilidad conforme su puede apreciar en su trabajo, por tanto existe una aplicación desigual del artículo 9 de la Ley 4.252/2010 por parte de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, para con mi mandante...”.-----

Verificados los antecedentes obrantes en autos tenemos que la recurrente, Rafaela Villalba Mariano, cuya fecha de nacimiento es 24 de octubre de 1946 —a la fecha con 70 años de edad— (f. 6), fue nombrada funcionaria permanente de la Dirección General de Migraciones en el año 1991 (f. 45) y cesada de sus funciones por Resolución DGJP—B. N° 855 del 26 de marzo de 2015, disposición administrativa que ordena la devolución de los aportes jubilatorios a la señora Rafaela Villalba Mariano, de conformidad con el Art. 1° de la Ley N° 4252/2010 (fs. 13/14). Con lo que, a la vista de los agravios esgrimidos y la situación particular de la accionante se constata que la misma se encuentra legitimada a los efectos de la impugnación del Art. 1° de la Ley N° 4252/2010.-----

De la lectura del escrito de promoción, se desprende que la actora cuestiona específicamente lo dispuesto en el Art. 9° de la Ley N° 2345/2003, modificado por el Art. 1° de la Ley N° 4252/2010. La norma atacada de inconstitucional dispone: “Art. 9°.- *El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5° de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47% (cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2,7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100% (cien por ciento). **Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la extraordinaria...***” (Las negritas son mías).-----

Vemos que el Art. 9° —modificado por el Art. 1° de la Ley N° 4252/2010—, que en esencia es impugnado, impone la obligación de jubilarse a los 65 años de edad. Es menester tener presente que la jubilación fue instituida como un derecho que asiste a todos los funcionarios o empleados activos, que han aportado parte de su salario por determinado tiempo y cumplido con los requisitos legales para poder retirarse de la función, a cambio de una renta o remuneración vitalicia, que le permita llevar una vida digna. “La jubilación tiene por objeto asegurar una subsistencia digna para aquellos que no pueden, por razones de salud, proseguir prestando servicios laborales y a las personas que, en un mo...///...



ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:
"RAFAELA VILLALBA MARIANO C/ ARTS. 3º,
9º Y 10º DE LA LEY Nº 2345/03". AÑO: 2016 – Nº
920.-----

opozamiento avanzado de sus vidas, deciden voluntariamente cesar en la prestación de actividades laborales o productivas" (BADENI, Gregorio. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo I. Ed. La Ley. Buenos Aires. Argentina. 2006. Pág. 918).-----

Esta materia constitucional está gobernada por principios como la razonabilidad, la proporcionalidad y la igualdad. Estos principios están íntimamente interconectados entre sí, de modo tal que una restricción no justificada o irrazonable de los derechos subjetivos también atenta contra el principio de igualdad. En palabras de Robert Alexy: "*Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual*" (ALEXY, Robert. *Teoría de los Derechos Fundamentales*. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. 1993. Pág. 395).-----

Debemos decir que, el más importante de todos los supuestos de inactividad cubiertos por los sistemas de protección social es, sin duda, la jubilación por edad; ello no sólo porque es la causa más frecuente, considerando el término previsible y normal de vida profesional, sino por el progresivo aumento de la edad media de la población y de su expectativa de vida actual.-----

En el caso en estudio, la accionante sostiene que la jubilación obligatoria establecida en el Art. 1º de la Ley Nº4252/2010, que modifica el Art. 9º de la Ley Nº2345/2003 "*De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público*", atenta contra derechos y principios consagrados en la Constitución.-----

La jubilación no puede —ni debe— tener carácter de sanción. La jubilación obligatoria, que fuerza al funcionario público a dejar su trabajo siendo aún apto para el mismo y teniendo aún idoneidad para seguir sirviendo a la comunidad, no condice con la finalidad última del mencionado instituto previsto en el marco de un sistema de protección social. Ello se agrava cuando el funcionario público obligado a la jubilación no cuenta con la cantidad de aportes suficientes para recibir la remuneración o renta vitalicia correspondiente.-----

Sobre este punto, la doctrina señala: "*La jubilación por vejez tiene un objetivo determinado, que es el de asegurar a aquellos trabajadores que se retiran total o parcialmente de la actividad una compensación que les permita mantener su estándar de vida como si aún estuviera en actividad. Es una ayuda basada en la solidaridad a la cual tienen derecho por haber contribuido a ella durante su vida útil con una parte de los ingresos producto de su trabajo*" (RUPRECHT, Alfredo J. *Prestaciones Económicas Vitalicias: Pensiones de Jubilación, Invalidez, Muerte y Supervivencia*. DE BUEN LOZANO, Néstor y MORGADO VALENZUELA, Emilio (Coordinadores). Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. México D.F. IJ-UNAM. 1997. Pág. 710).-----

Lo señalado se trasluce en el Art. 6º de la Constitución Nacional que dice: "*La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad...*" (Las negritas son mías), es justamente la Seguridad Social —también prevista en el Art. 95º de la Constitución— uno de los instrumentos por medio del cual el Estado cumple su obligación de garantizar la calidad de vida de las personas; y, entre los institutos de la Seguridad Social se encuentra la jubilación.-----

En esta línea de razonamiento, una norma que impide al individuo desarrollarse dignamente como persona por medio del trabajo —cuando aún se encuentre en condiciones físicas y psíquicas aptas para hacerlo— no es funcional a la norma constitucional citada. Por otro lado, la situación se agrava cuando el haber jubilatorio otorgado al individuo es exiguo, impidiéndole afrontar dignamente los avatares propios de la vida y de la edad; en efecto, es

Abog. Julio C. Pavón Martínez
Secretario

Miriam Peña Candia
MINISTRA C.S.J.

Dr. ANTONIO FRETES
Ministro

GLADYS E. BAREIRO de MÓDICA
Ministra

bien sabido que a medida que la persona avanza en años, los requerimientos de la salud van también en aumento, circunstancia que impone que el individuo cuente con un haber jubilatorio razonable que le permita acceder a una vida en las condiciones garantizadas por la Carta Magna.-----

Esta Sala Constitucional ha sostenido, en reiterados fallos uniformes, que una persona jubilada —mayor a 65 años de edad— puede volver a ingresar en la función pública, sin más requisito que lo establecido en el Art. 47° numeral 3) de la Constitución, es decir, la idoneidad, que es la capacidad o capacitación para el desempeño de un cargo o función pública (Ac. y Sent. N° 604 del 09/05/2016; N° 573 del 02/05/2016 y N° 2034 del 31/12/2013, entre otros) “...para los demás empleos —que debemos entender referidos a los empleos públicos— la idoneidad es la pauta exclusiva con que puede manejarse la forma y la selección de los candidatos. Todo requisito exigible debe filtrarse a través de la idoneidad, o sea, configurar un elemento que califique a la idoneidad...” (BIDART CAMPOS, Germán. *Manual de la Constitución Reformada*. Tomo I. Editorial Ediar. Buenos Aires. Argentina. 2001. Pág. 539).-----

Los argumentos expuestos en los párrafos precedentes son absolutamente suficientes para determinar la suerte de la presente inconstitucionalidad; sin embargo, no resulta superfluo considerar una última circunstancia que refuerza todavía más —por si fuera necesario— la tesis hasta aquí esbozada, y que guarda relación con una garantía fundamental en materia de derechos laborales, cual es, la estabilidad, prevista en el Art. 94° de la Constitución.-----

En efecto, la estabilidad implica que un trabajador tiene derecho a conservar su empleo durante toda su vida de trabajo, sin que pueda privársele del mismo, a menos que exista una causa que justifique ya sea el despido o alguna otra forma de desvinculación.-----

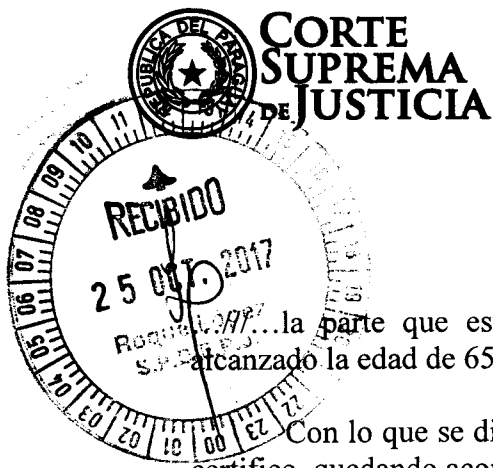
La doctrina, al respecto, tiene dicho: “*El derecho del trabajo no admite que el empleador pueda usar de esa posibilidad (resolución del contrato de trabajo); a tal efecto concede al contrato — en lo que respecta al trabajador — una cierta vocación de permanencia, limitada en los casos de excepción en que se admite la contratación por tiempo determinado; en cambio, si se admite ésta posibilidad de resolución a favor de éste, que sólo está obligado —si no mediere un contrato a plazo— a notificar su decisión (...)* Ese derecho —estabilidad a favor del trabajador— constituye una garantía de la conservación del empleo...” (VÁZQUEZ VIALARD, Antonio. *Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires. Argentina. 1999. Pág. 348). La estabilidad en el empleo es, en resumidas cuentas, “*el derecho del trabajador a permanecer en el trabajo mientras su actividad sea necesaria para el empleador*” (DE BUEN UNNA, Carlos. *La extinción de la relación de trabajo en DE BUEN LOZANO Néstor y MORGADO VALENZUELA, Emilio (Coordinadores). Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*. IIJ-UNAM. México D.F. 1997 Págs. 504/505).-----

Así pues, la norma cuya constitucionalidad se cuestiona atenta también contra la garantía de estabilidad en el empleo, al forzar la jubilación de los funcionarios públicos sin contemplar, entre otros factores, la necesidad que pudiera existir respecto de la actividad del funcionario.-----

En este orden de ideas, no existe impedimento para que un funcionario público que ha superado los sesenta y cinco años de edad pueda seguir trabajando y aportando a la sociedad. Esta hermenéutica no podría invocarse como perjudicial para la calidad de la función pública, dado que la Ley N° 1626/2000 prevé los mecanismos para la remoción o recambio de los funcionarios que dejen de ser aptos para la labor encargada o ya no cumplan con las obligaciones que le fueran encomendadas.-----

Por todo lo anterior, estimo que corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo analizado.-----

En conclusión, corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad y, en consecuencia, con relación a la accionante declarar inaplicable el Art. 1° de la Ley N° 4252/2010 —que modifica el Art. 9° de la Ley N° 2345/2003—, específicamente en ...///...



ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:
"RAFAELA VILLALBA MARIANO C/ ARTS. 3º,
9º Y 10º DE LA LEY N° 2345/03". AÑO: 2016 - N°
920.-----

...la parte que establece la obligatoriedad de acogerse a la jubilación por haber
alcanzado la edad de 65 años de edad. **Voto en ese sentido.**-----

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que
certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Miryam Peña Candia
MINISTRA C.S.J.

GLADYS E. BAREIRO de MÓDICA
Ministra

Ante mí:

Abog. Julio C. Pavón Martínez
Secretario

DR. ANTONIO FRETES
Ministro

SENTENCIA NUMERO: 1443.

Asunción, 24 de octubre de 2017.-

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala Constitucional
RESUELVE:

HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad promovida y, en
consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art.1 de la Ley N° 4252/10, que modifica el
Art. 9 de la Ley N° 2345/03 "en la parte que establece la obligatoriedad de acogerse a la
jubilación por haber alcanzado la edad de 65 años", con relación a la accionante.-----

ANOTAR, registrar y notificar.

SE. VERNWART, 24 de octubre de 2017
Abog. Julio C. Pavón Martínez
Secretario

Miryam Peña Candia
MINISTRA C.S.J.

GLADYS E. BAREIRO de MÓDICA
Ministra

DR. ANTONIO FRETES
Ministro

Ante mí:

Abog. Julio C. Pavón Martínez
Secretario

